

BOLETIN OFICIAL



DE LA REPUBLICA ARGENTINA
DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL

AÑO LXXV

Buenos Aires, martes 7 de noviembre de 1967

Número 21.308

JUSTICIA NACIONAL

CÓDIGO PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACION. —
Las disposiciones del citado código regirán a partir del 1º de febrero de 1968.

Buenos Aires, 15 de setiembre de 1967.

Al Excmo. Señor Presidente de la Nación:

Tenemos el honor de dirigirme al Excmo. Señor Presidente, con el objeto de someter a vuestra consideración el Proyecto de Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Al ser convertido en ley dicho Código regirá los procesos que se sustancien ante los tribunales de la justicia federal y nacional de la Capital de la República en los fueros civil, comercial y de paz, en sustitución del Código de Procedimiento Civil y Comercial, de la Ley 50 y de los artículos 34 a 55, 60 y 61 de la Ley 11.924, así como de determinadas leyes complementarias.

El Código vigente y la Ley 50, sancionados en el curso del siglo pasado, fueron reformados parcialmente en distintas épocas con el propósito de resolver cuestiones técnicas cuya solución se consideró urgente. El tiempo transcurrido y la experiencia acumulada han puesto en evidencia la necesidad de una reforma sustancial de las leyes procesales en vigor. Por tal motivo, y en cumplimiento de la directiva del Excmo. Señor Presidente, de fecha 4 de agosto de 1966, para el planeamiento y desarrollo de la acción de gobierno (punto VI, B, 3, Justicia), se ha elaborado el presente proyecto de código que estructura un sistema orgánico y congruente en todas sus disposiciones, e incorpora o adecua, según los casos, las instituciones que la doctrina y la jurisprudencia han indicado como las más convenientes.

El proyecto mantiene el sistema escrito y el régimen de la doble instancia. Sus objetivos fundamentales consisten en obtener una eficaz administración de justicia sobre la base de reglas procesales que respondan a las exigencias de celeridad de los trámites y de moralización del proceso, sin coartar la garantía constitucional de la defensa en juicio. Asimismo, se unifican las normas aplicables, superando la actual dispersión en distintas leyes que dificulta la labor de los jueces y de los profesionales.

Una sola modificación se introduce al Proyecto elaborado por la Comisión Redactora. Se refiere al art. 286, que contempla el depósito que debe efectuar la parte que interpone queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por denegación del recurso extraordinario. Se ha considerado preferible mantener el texto del artículo 8º de la Ley 17.116, por las razones expresadas en el mensaje correspondiente a dicha ley.

La magnitud del proyecto, que en 822 artículos contiene una regulación completa de las instituciones procesales, y la naturaleza de las innovaciones que introduce aconsejan incluir como parte integrante de este mensaje la exhaustiva exposición de motivos presentada a la Secretaría de Estado de Justicia por la Comisión Redactora.

Se propone como fecha de vigencia del Código el 1º de febrero de 1968, a fin de que los jueces y los profesionales puedan informarse plenamente de su contenido y dada la incidencia que tendrá en los procesos que se encuentran actualmente en trámite.

Dios guarde a Vuestra Excelencia.

Guillermo A. Borda — Conrado Etchebarne, (hijo).

EXPOSICION DE MOTIVOS

I

INTRODUCCION

Por las Resoluciones números 59/66 y 11/67 de la Secretaría de Estado de Justicia fuimos designados para proponer las más urgentes reformas al Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Capital, especialmente aquellas que propendan a imprimir mayor agilidad y celeridad a los juicios.

A raíz del intercambio de ideas que tuvo lugar entre los miembros de la Comisión durante las reuniones celebradas a partir del mes de enero del corriente año, llegamos a la conclusión de que la manera más apropiada de satisfacer las necesidades de la administración de justicia, consistía en emprender la reforma integral de la legislación procesal civil y comercial vigente en la Capital Federal y en el orden nacional, mediante la redacción de un nuevo código destinado a regir en esas jurisdicciones.

Las razones determinantes de esa conclusión se apoyaron, en primer lugar, en la consideración de que el sistema de las reformas parciales, adoptado desde la sanción de la Ley 4.128, aparte de destruir la necesaria armonía y unidad que debe presentar todo ordenamiento legal, suele ser fuente de múltiples confusiones y desconcertos en materia interpretativa, como lo comprueba la experiencia de los últimos años.

En segundo lugar, nos decidió a aconsejar ese temperamento la circunstancia de que durante las últimas tres décadas, la bibliografía jurídica argentina se ha enriquecido, en importante medida, merced al aporte de especialistas que se han consubstanciado con las enseñanzas de la mejor doctrina contemporánea, señalando al legislador numerosas directivas tendientes al perfeccionamiento de las instituciones procesales.

En la labor doctrinaria se encuentra reflejada, por otra parte, en los proyectos de reforma elaborados por Jofré (1926), Lascano (1935), Nazar Anchorena y otros (1937), Podetti (1949) y Fernández (1959), y en los códigos procesales vigentes en varias provincias argentinas. La jurisprudencia de los tribunales nacionales tampoco ha permanecido ajena a la influencia de esa doctrina, según lo demuestra el gran número de precedentes judiciales que, acudiendo a la obra de los procesalistas argentinos y extranjeros, ha suplido parte de las omisiones de que adolece el ordenamiento procesal vigente y atenuado las dificultades que naturalmente ha traído aparejada la aplicación de normas sancionadas para satisfacer necesidades de más de un siglo atrás. Teníamos pues, en nuestras manos, un material doctrinario, legislativo y jurisprudencial no desdeñable para emprender una reforma del alcance de la propuesta.

Los integrantes de la Comisión convinimos finalmente en que, de llevarse a cabo la reforma con esa amplitud, no existía razón alguna para restringirla al Código de Procedimiento de la Capital, con prescindencia de las normas procesales que deben observarse ante los tribunales federales de ese distrito y de las provincias. La existencia de dos ordenamientos vigentes, uno en la Capital y otro en la jurisdicción federal, explicable por las circunstancias históricas en que

fue sancionada la Ley 50, carece en la actualidad de toda justificación, admitido como hoy está en forma indiscutida, el carácter nacional de todos los jueces que ejercen sus funciones en la Capital de la República. Por otra parte, son conocidas las dificultades interpretativas a que ha dado lugar la subsistencia de la Ley 50 junto al Código de Procedimiento de la Capital y a las diversas reformas parciales de que este último fue objeto.

Asimismo, consideramos conveniente incluir en el Código la reglamentación de los procedimientos aplicables a las causas que corresponden a la competencia de la justicia nacional de paz, y excluir solamente de aquél a los procesos laborales, cuyas particulares características no hacen aconsejable tratarlos conjuntamente con los procesos que versan sobre materia civil y comercial. Ello, sin perjuicio de que parte de la normativa proyectada, pudiera ser común a dicho fuero, posibilidad a contemplar por la Comisión que tiene a su cargo las reformas a la Ley 12.948.

Nuestras sugerencias fueron aceptadas y la Secretaría de Estado de Justicia dictó, en consecuencia, la Resolución Nº 70 del 8 de marzo de 1967, por la cual autorizó a la Comisión Redactora en materia de Legislación Procesal (Civil y Comercial) a elaborar un Proyecto de Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

II

LINEAMIENTOS GENERALES DEL PROYECTO

La Comisión ha trabajado en la inteligencia de que para redactar un ordenamiento claro, completo, y no desentendido de las soluciones totales, es preciso regular las diversas vías de acción mediante normas cuya flexibilidad permita evitar repeticiones, pluralidad de procesos especiales y excesos reglamentarios.

En todo momento la labor se ha llevado a cabo al margen de tendencias de escuelas y doctrinas, evitando el trasplante de instituciones extranjeras que no fueran apropiadas a las modalidades de nuestro medio. Inspirados en ese propósito se resolvieron las disidencias suscitadas respecto de la regulación de algunas instituciones.

Como se podrá advertir a través de la lectura de esta Exposición de Motivos, se ha tratado en todo momento de establecer un real equilibrio entre los poderes atribuidos a los jueces y las facultades otorgadas a las partes, procurando así la necesaria armonía que debe presidir el desenvolvimiento del proceso judicial.

Tres han sido los propósitos orientadores del ordenamiento proyectado:

1º Dotar a los jueces de mayores atribuciones en lo referente a la dirección y ordenación de las causas, de manera tal que el proceso, sin dejar de responder a las exigencias fundamentales del principio dispositivo, no se desarrolle como un juego de ficciones librado a la habilidad ocasional de los litigantes.

2º Reprimir con mayor severidad y eficacia los casos de inconducta procesal.

3º Suprimir formalidades innecesarias y agilizar, en general, los trámites procesales, eliminando los factores que gravitan en la excesiva prolongación de los juicios.

El primero de los mencionados propósitos se concreta no sólo en las atribuciones conferidas a los jueces para disponer de oficio "las diligencias necesarias para esclarecer la verdad de los hechos controvertidos", así como aquellas encaminadas a mantener la vigencia de los principios de economía, igualdad y moralidad (art. 34), sino también en el poder que se les atribuye para ordenar el pase de una a otra etapa del proceso sin necesidad de aguardar las peticiones de las partes (art. 36, inc. 1º). Adherimos de tal modo al sistema de impulso procesal de oficio, sin que ello suponga liberar a las partes de la carga que también les incumbe en ese aspecto, y que continuará siendo primordial, como lo demuestra la circunstancia de haberse mantenido, entre otras instituciones que responden al mismo principio, la de la extinción del proceso por caducidad de instancia.

También importan una concreción de las mayores facultades acordadas expresamente a los jueces, la de imponer sanciones pecuniarias progresivas tendientes a que las partes cumplan sus mandatos ("astreintes") (art. 37) y los poderes que se les confieren para disponer, de oficio, la imposición de las costas (art. 68); la integración de la litis en los supuestos de litisconsorcio necesario (art. 89); la habilitación de días y horas (art. 153); la nulidad de los actos procesales (art. 172); el rechazo in limine de articulaciones manifiestamente inadmisibles (arts. 173 y 179); la acumulación de procesos (art. 190); el otorgamiento de medidas cautelares distintas a las peticidas cuando éstas causaren perjuicio o gravamen innecesario al destinatario de la medida (art. 204); el rechazo inmediato de medidas probatorias que fuesen manifiestamente superfluas o exclusivamente de teorías (art. 364); la determinación del tipo de proceso aplicable; etc.

La consagración del principio de moralidad se traduce en numerosas normas como son, entre otras, la que impone a los jueces el deber de declarar, en oportunidad de dictar las sentencias definitivas, la temeridad o malicia en que hubieren incurrido los litigantes o profesionales intervinientes (art. 34, inc. 6º), declara nula que faculta a aquéllos para sancionar a unos u otros o a ambos conjuntamente (art. 45); la que prevé, en el supuesto de que el deudor niegue maliciosamente su firma en los trámites preparatorios del juicio ejecutivo, la imposición a aquél de una multa, a favor de la otra parte, equivalente al treinta por ciento del monto de la deuda, cantidad que deberá darse a embargo como requisito de admisibilidad de las excepciones (art. 529) y las que reprimen, en general, la promoción de cuestiones ostensiblemente encaminadas a entorpecer el normal desarrollo de las causas.

A dar mayor agilidad y celeridad tienden, finalmente, entre otras disposiciones, la que consagra el régimen de la apelación diferida respecto de providencias simples y resoluciones interlocutorias, como arbitrio destinado a evitar las demoras que implican las frecuentes remisiones del expediente a la cámara durante la sustanciación del juicio (art. 247 y sus aplicaciones particulares en los arts. 67, 366, 557, etc.); la que establece el principio de la habilitación tácita de días y horas (art. 154); la que restringe el número de providencias que deben notificarse personalmente o por cédula (art. 135); las que suprimen el trámite de la previa intimación en los supuestos de no haberse constituido domicilio (art. 41) o acompañando copia de los escritos (art. 120); la que obliga a los jueces a señalar las audiencias de prueba dentro del respectivo período y califica de falta grave el incumplimiento de ese deber (art. 153); la que declara la inapelabilidad de las resoluciones sobre producción, denegación y sustanciación de las pruebas, sin perjuicio de que el interesado solicite el diligenciamiento de aquéllas por la cámara, en oportunidad del trámite abierto por el recurso concedido contra la sentencia definitiva (art. 379) y la que sanciona con la pérdida de la jurisdicción para conocer en la causa, a los jueces que no dicten sentencia dentro de los plazos legales y de las ampliaciones que de ello se hubiesen pedido oportunamente (art. 167).



19671107

- 5º Ser o haber sido el juez denunciador o acusador del recusante ante los tribunales, o denunciado o acusado ante los mismos tribunales, con anterioridad a la iniciación del pleito.
- 6º Ser o haber sido el juez denunciado por el recusante en los términos de la ley de enjuiciamiento de magistrados, siempre que la Corte Suprema hubiere dispuesto dar curso a la denuncia.
- 7º Haber sido el juez defensor de alguno de los litigantes o emitido opinión o dictamen o dado recomendaciones acerca del pleito, antes o después de comenzado.
- 8º Haber recibido el juez beneficios de importancia de alguna de las partes.
- 9º Tener el juez con alguno de los litigantes amistad que se manifieste por gran familiaridad o frecuencia de trato.
- 10º Tener contra el recusante enemistad, odio o resentimiento, que se manifieste por hechos conocidos. En ningún caso procederá la recusación por ataques u ofensas inferidas al juez después que hubiese comenzado a conocer del asunto.
18. Oportunidad. — La recusación deberá ser deducida por cualquiera de las partes en las oportunidades previstas en el artículo 14. Si la causal fuere sobreviniente, sólo podrá hacerse valer dentro de quinto día de haber llegado a conocimiento del recusante y antes de quedar el expediente en estado de sentencia.
19. Tribunal Competente para Conocer de la Recusación. — Cuando se recusare a uno o más jueces de la Corte Suprema o de una cámara de apelaciones, conocerán los que queden hábiles, integrándose el tribunal, si procediere, en la forma prescrita por la ley orgánica y el Reglamento para la Justicia Nacional. De la recusación de los jueces de primera instancia conocerá la cámara de apelaciones respectiva.
20. Forma de Deducirla. — La recusación se deducirá ante el juez recusado y ante la Corte Suprema o cámara de apelaciones, cuando lo fuese de uno de sus miembros. En el escrito correspondiente, se expresarán las causas de la recusación, y se propondrá y acompañará, en su caso, toda la prueba de que el recusante intente valerse.
21. Rechazo "In Limine". — Si en el escrito mencionado en el artículo anterior no se alegase concretamente alguna de las causas contenidas en el artículo 17, o si se presentase fuera de las oportunidades previstas en los artículos 14 y 18, la recusación será desechada, sin darle curso, por el tribunal competente para conocer de ella.
22. Informe del Magistrado Recusado. — Deducida la recusación en tiempo y con causa legal, si el recusado fuese un juez de la Corte Suprema o de cámara se le comunicará aquella, a fin de que informe sobre las causas alegadas.
23. Consecuencias del Contenido del Informe. — Si el recusado reconociese los hechos, se le tendrá por separado de la causa. Si los negare, con lo que exponga se formará incidente que tramitará por expediente separado.
24. Apertura a Prueba. — La Corte Suprema o cámara de apelaciones, integradas al efecto si procediere, recibirán el incidente a prueba por diez días, si hubiere de producirse dentro de la ciudad donde tiene su asiento el tribunal. El plazo se ampliará en la forma dispuesta en el artículo 158.
- Cada parte podrá ofrecer más de tres testigos.
25. Resolución. — Vencido el plazo de prueba y agregadas las producidas, se dará vista al juez recusado y se resolverá el incidente dentro de cinco días.
26. Informe de los Jueces de Primera Instancia. — Cuando el recusado fuere un juez de primera instancia, remitirá a la cámara de apelaciones, dentro de los cinco días, el escrito de recusación con un informe sobre las causas alegadas, y pasará el expediente al juez que sigue en el orden del turno para que continúe su sustanciación. Igual procedimiento se observará en caso de nuevas recusaciones.
27. Trámite de la Recusación de los Jueces de Primera Instancia. — Pasados los antecedentes, si la recusación se hubiese deducido en tiempo y con causa legal, la cámara de apelaciones, siempre que del informe elevado por el juez resultare la exactitud de los hechos, lo tendrá por separado de la causa. Si los negare, la cámara podrá recibir el incidente a prueba, y se observará el procedimiento establecido en los artículos 24 y 25.
28. Efectos. — Si la recusación fuese desechada, se hará saber la resolución al juez subrogante a fin de que devuelva los autos al juez recusado. Si fuese admitida, el expediente quedará radicado ante el juez subrogante con noticia al juez recusado, aún cuando con posterioridad desaparecieren las causas que la originaron.
- Cuando el recusado fuese uno de los jueces de la Corte Suprema o de las cámaras de apelaciones, seguirán conociendo en la causa el o los integrantes o sustitutos legales que hubiesen resuelto el incidente de recusación.
29. Recusación Maliciosa. — Desestimada una recusación con causa, se aplicarán las costas y una multa de hasta veinte mil pesos moneda nacional por cada recusación, si ésta fuere calificada de maliciosa por la resolución desestimatoria.
30. Excusación. — Todo juez que se hallare comprendido en alguna de las causas de recusación mencionadas en el artículo 17 deberá excusarse. Asimismo podrá hacerlo cuando existan otras causas que le impongan abstenerse de conocer en el juicio, fundadas en motivos graves de decoro o delicadeza.
- No será nunca motivo de excusación el parentesco con otros funcionarios que intervengan en cumplimiento de sus deberes.
31. Oposición y Efectos. — Las partes no podrán oponerse a la excusación ni dispensar las causales invocadas. Si el juez que sigue en el orden del turno entendiere que la excusación no procede, se formará incidente que será remitido sin más trámite al tribunal de alzada, sin que por ello se paralice la sustanciación de la causa.
- Aceptada la excusación, el expediente quedará radicado en el juzgado que correspondiera, aun cuando con posterioridad desaparecieren las causas que la originaron.
32. Falta de Excusación. — Incurrirá en la causal de "mal desempeño", en los términos de la ley de enjuiciamiento de magistrados, el juez a quien se probare que estaba impedido de entender en el asunto y a sabiendas haya dictado en él resolución que no sea de mero trámite.
33. Ministerio Público. — Los funcionarios del ministerio público no podrán ser recusados. Si tuviesen algún motivo legítimo de excusación, deberán manifestarlo al juez o tribunal y éstos podrán separarlos de la causa, dando intervención a quien deba subrogarlos.

CAPITULO IV

Deberes y Facultades de los Jueces

34. Deberes. — Son deberes de los jueces:
- 1º Asistir a las audiencias de prueba, bajo pena de nulidad, cuando cualquiera de las partes lo pidiere con anticipación no menor de dos días a su celebración, y realizar personalmente las demás diligencias que este Código u otras leyes ponen a su cargo, con excepción de aquellas en las que la delegación estuviere autorizada.
- En los juicios de divorcio y de nulidad de matrimonio, en la providencia que ordena el traslado de la demanda se fijará una audiencia a la que deberán comparecer personalmente las partes y el representante del ministerio público, en su caso. En ella el juez tratará de averiguar sobre las cuestiones relacionadas con la tenencia de hijos, régimen de visitas y atribución del hogar conyugal.
- 2º Decidir las causas, en lo posible, de acuerdo con el orden en que hayan quedado en estado, salvo las preferencias establecidas en el Reglamento para la Justicia Nacional.
- 3º Dictar las resoluciones con sujeción a los siguientes plazos:
- a) Las providencias simples, dentro de los tres días de presentadas las peticiones por las partes o del vencimiento del plazo conforme a lo prescrito en el artículo 38, inciso 1º, e inmediatamente, si debieran ser dictadas en una audiencia o revistieran carácter urgente.
- b) Las sentencias interlocutorias, salvo disposición en contrario, dentro de los diez o quince días de quedar el expediente a despacho, según se trate de juez unipersonal o de tribunal colegiado.
- c) Las sentencias definitivas, salvo disposición en contrario, dentro de los cuarenta o sesenta días, según se trate de juez unipersonal o de tribunal colegiado. El plazo se computará, en el primer caso, desde que el llamamiento de autos para sentencia quede firme, y en el segundo, desde la fecha del sorteo del expediente.

- 4º Fundar toda sentencia definitiva o interlocutoria, bajo pena de nulidad, respetando la jerarquía de las normas vigentes y el principio de congruencia.
- 5º Dirigir el procedimiento, debiendo, dentro de los límites expresamente establecidos en este Código:
- a) Concentrar, en lo posible, en un mismo acto o audiencia todas las diligencias que sea menester realizar.
- b) Señalar, antes de dar trámite a cualquier petición, los defectos u omisiones de que adolezca, ordenando que se subsanen dentro del plazo que fije, y disponer de oficio toda diligencia que fuere necesaria para evitar nulidades.
- c) Mantener la igualdad de las partes en el proceso.
- d) Prevenir y sancionar todo acto contrario al deber de lealtad, probidad y buena fe.
- e) Vigilar para que en la tramitación de la causa se procure la mayor economía procesal.
- 6º Declarar, en oportunidad de dictar las sentencias definitivas, la temeridad o mala fe en que hubieren incurrido los litigantes o profesionales intervinientes.
35. Facultades Disciplinarias. — Para mantener el buen orden y decoro en los juicios, los jueces y tribunales podrán:
- 1º Mandar que se teste toda frase injuriosa o redactada en términos indecorosos u ofensivos.
- 2º Excluir de las audiencias a quienes perturben indebidamente su curso.
- 3º Aplicar las correcciones disciplinarias autorizadas por este Código, la ley orgánica y el Reglamento para la Justicia Nacional. El importe de las multas que no tuviesen destino especial establecido en este Código, se aplicará al que le fije la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Hasta tanto dicho tribunal determine quiénes serán los funcionarios que deberán promover la ejecución de las multas, esa atribución corresponderá a los representantes del ministerio público fiscal ante las respectivas jurisdicciones. La falta de ejecución dentro de los treinta días de quedar firme la resolución que las impuso, el retardo en el trámite o el abandono injustificado de éste, será considerado falta grave.
36. Facultades Ordenatorias e Instructorias. — Aún sin requerimiento de parte, los jueces y tribunales podrán:
- 1º Tomar medidas tendientes a evitar la paralización del proceso. A tal efecto, vencido un plazo, se haya ejercido o no la facultad que corresponda, se pasará a la etapa siguiente en el desarrollo procesal, disponiendo de oficio las medidas necesarias.
- 2º Ordenar las diligencias necesarias para esclarecer la verdad de los hechos controvertidos, respetando el derecho de defensa de las partes.
- 3º Corregir algún error material o suplir cualquier omisión de la sentencia acerca de las pretensiones deducidas en el litigio, siempre que la enmienda o agregado no altere lo sustancial de la decisión, y ésta no hubiese sido consentida por las partes.
- 4º Disponer, en cualquier momento, la comparecencia personal de las partes para intentar una conciliación o requerir las explicaciones que estimen necesarias al objeto del pleito. La mera proposición de fórmulas conciliatorias no importará prejuzgamiento.
- 5º Decidir en cualquier momento la comparecencia de los peritos y de los testigos para interrogarlos acerca de todo aquello que creyeren necesario.
- 6º Mandar, con las formalidades prescritas en este Código, que se agreguen documentos existentes en poder de las partes o de los terceros, en los términos de los artículos 387 a 389.
37. Sanciones Conminatorias. — Los jueces y tribunales podrán imponer sanciones pecuniarias compulsivas y progresivas tendientes a que las partes cumplan sus mandatos, cuyo importe será a favor del litigante perjudicado por el incumplimiento.
- Las condenas se graduarán en proporción al caudal económico de quien deba satisfacerlas y podrán ser dejadas sin efecto, o ser objeto de reajuste, si aquél desiste de su resistencia y justifica total o parcialmente su proceder.

CAPITULO V

Secretarios

38. Deberes. — Sin perjuicio de los deberes que en otras disposiciones de este Código y en las leyes de organización judicial se imponen a los secretarios, éstos deberán:
- 1º Firmar las providencias simples que dispongan:
- a) Agregar partidas, exhortos, pericias, oficios, inventarios, tasaciones, división o partición de herencia, rendiciones de cuentas y, en general, documentos y actuaciones similares.
- b) Remitir la causa a los ministerios públicos, representantes del fisco y demás funcionarios que intervengan como parte.
- c) Devolver escritos presentados fuera de plazo, o sin copias.
- d) Dar vista de liquidaciones.
- Dentro del plazo de tres días, las partes podrán pedir al juez que deje sin efecto lo dispuesto por el secretario.
- 2º Suscribir certificados y testimonios; y sin perjuicio de la facultad conferida a los letrados por el artículo 400, suscribir los oficios ordenados por el juez, excepto los que se dirijan al Presidente de la Nación, ministros y secretarios del Poder Ejecutivo, funcionarios de análoga jerarquía y magistrados judiciales.
39. Recusación. — Los secretarios de primera instancia únicamente podrán ser recusados por las causas previstas en el artículo 17.
- Deducida la recusación, el juez se informará sumariamente sobre el hecho en que se funde, y sin más trámite dictará resolución que será inapelable.
- Los secretarios de la Corte Suprema y los de las cámaras de apelaciones no serán recusables; pero deberán manifestar toda causa de impedimento que tuvieren a fin de que el tribunal lo considere y resuelva lo que juzgare procedente.
- En todos los casos serán aplicables, en lo pertinente, las reglas establecidas para la recusación y excusación de los jueces.

TITULO II

PARTES

CAPITULO I

Reglas Generales

40. Domicilio. — Toda persona que litigue por su propio derecho o en representación de tercero, deberá constituir domicilio legal dentro del perímetro de la ciudad que sea asiento del respectivo juzgado o tribunal.
- Ese requisito se cumplirá en el primer escrito que presente, o audiencia a que concurra, si es ésta la primera diligencia en que interviene.
- En las mismas oportunidades deberá denunciarse el domicilio real de la persona representada.
- Se diligenciarán en el domicilio legal todas las notificaciones a domicilio que no deban serlo en el real.
41. Falta de Constitución y Denuncia de Domicilio. — Si no se cumpliere con lo establecido en la primera parte del artículo anterior, o no compareciere quien haya sido debidamente citado, quedará automáticamente constituido el domicilio legal en los estrados del juzgado o tribunal, salvo el caso del segundo párrafo del artículo 59. Allí se practicarán las notificaciones de los actos procesales que correspondan, en la forma y oportunidad determinadas por el artículo 133.
- Si no se denunciare el domicilio real, o su cambio, las resoluciones que deban notificarse en dicho domicilio se notificarán en el lugar que se hubiere constituido y, en defecto también de éste, se observará lo dispuesto en el párrafo anterior.
42. Subsistencia de los Domicilios. — Los domicilios a que se refieren los artículos anteriores subsistirán para los efectos legales hasta la terminación del juicio o su archivo, mientras no se constituyan o denuncien otros.
- Cuando no existieren los edificios, quedaren deshabitados o desaparecieren, o se alterare o suprimiere su numeración, y no se hubiese constituido o denunciado un nuevo domicilio, con el informe del notificador se observará lo dispuesto en la primera o segunda parte del artículo anterior, según se trate, respectivamente, del domicilio legal o del real.
- Todo cambio de domicilio deberá notificarse por cédula a la otra parte. Mientras esta diligencia no se hubiese cumplido, se tendrá por subsistente el anterior.

Recomienda aconsejable y conveniente coordinar la acción de los diversos organismos del Estado, con el objeto de adoptar decisiones de conjunto sobre los casos que pudieran plantearse, y conferir intervención al Banco Industrial de la República Argentina para que desde el punto de vista técnico, económico y financiero, evalúe ajustadamente la situación actual y perspectivas de las empresas.

Dios guarde a V. E.
Adalbert Krieger Vasena. — Julio R. Alvarez. —

LEY Nº 17.507. Buenos Aires 31 de octubre de 1967.

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 5º del Estatuto de la Revolución Argentina.

El Presidente de la Nación Argentina, Sanciona y Promulga con Fuerza de Ley:

Artículo 1º — Facúltase al Poder Ejecutivo Nacional a autorizar soluciones tendientes a posibilitar la rehabilitación de empresas que a la fecha de promulgación de esta Ley se encuentren en virtual estado de cesación de pagos o que afronten dificultades financieras que solo puedan ser superadas con disposiciones excepcionales del Estado. Decláranse empresas comprendidas en el régimen que se instituye, a aquellas que por su preponderancia social, su envergadura económica, su desarrollo tecnológico o su influencia en la economía nacional, regional o zonal se considere conveniente asistir, a solo juicio del Poder Ejecutivo.

Artículo 2º — A los fines precedentemente autorizados y cuando la situación de las empresas lo hiciera imprescindible, el Poder Ejecutivo podrá eximir las total o parcialmente del pago de intereses, recargos y multas por mora en el cumplimiento de las obligaciones fiscales o de previsión. Podrá además otorgarles facilidades y convenir planes para el pago de los mencionados tributos, en las condiciones y con las garantías que para cada caso se determinen.

Artículo 3º — Las empresas que opten por acogerse al régimen de excepción de esta Ley deberán presentarse dentro de los treinta días de la fecha de publicación de su reglamentación, observando los requisitos que se establezcan y produciendo la información que se le requiera. El acogimiento importará, en todos los casos, el sometimiento de las empresas beneficiadas al control del Poder Ejecutivo en la forma y modo que en cada caso se establezca. La presentación hasta tanto no recaiga decisión definitiva de acogimiento, no suspende la obligación de las empresas de continuar cumplimentando sus obligaciones fiscales y previsionales, ni altera la exigibilidad de tales créditos por los respectivos organismos del Estado.

Artículo 4º — Derógase toda disposición legal o reglamentaria, en cuanto se opusiere a esta Ley.

Artículo 5º — Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección General del Boletín Oficial y archívese.

Onganía. — Adalbert Krieger Vasena. — Julio E. Alvarez.

BIENES DEL ESTADO

Transferencia.

Buenos Aires, 23 de octubre de 1967

Al Excmo. señor Presidente de la Nación:

Tengo el honor de dirigirme a V. E. a fin de someter a vuestra consideración el adjunto proyecto de ley, por la cual se transfieren sin cargo a la Provincia de Río Negro bienes muebles pertenecientes al Consejo Agrario Nacional, dependiente de la Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería.

Dicha transferencia se realiza en razón de que el Consejo Agrario Nacional, por Resolución Nº 375 de fecha 2 de noviembre de 1966, declaró bienes en desuso los elementos que se hallan en la Provincia de Río Negro, disponiendo al propio tiempo su donación a la citada Provincia, la cual los había solicitado por ser de utilidad para sus servicios técnicos y administrativos.

Dios guarde a V. E.

Adalbert Krieger Vasena.

LEY Nº 17.497. Buenos Aires, 23 de octubre de 1967

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 5º del Estatuto de la Revolución Argentina,

El Presidente de la Nación Argentina, Sanciona y Promulga con fuerza de Ley:

Artículo 1º — Transfiérese sin cargo a la Provincia de Río Negro los bienes muebles que se detallan en la Resolución Nº 375 del 2 de noviembre de 1966, del Consejo Agrario Nacional, que forma parte integrante de la presente ley.

Artículo 2º — Facúltase al Consejo Agrario Nacional para que adopte las providencias necesarias a fin de concretar la donación a que se refiere el artículo anterior.

Artículo 3º — Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Onganía. — Adalbert Krieger Vasena.

RESOLUCION Nº 375. Buenos Aires, 2 de noviembre de 1966.

VISTO el presente expediente Nº 109164, y atento que los elementos que posee este Organismo en la provincia de Río Negro han

dejado de tener utilidad para los fines que fueron adquiridos, y en cambio reportan un indudable beneficio para la Repartición que gestiona su transferencia, por lo cual se entiende prudente su donación.

Por todo ello, y de acuerdo a las facultades otorgadas por el artículo 53 de la Ley de Contabilidad,

El Interventor del Consejo Agrario Nacional, Resuelve:

1º — Decláranse bienes en desuso los elementos cuyas características se detallan a continuación y que se hallan depositados en la provincia de Río Negro:

1	Fichero de acero 5 caj.	Nº 92	700. —
1	"	" 5 " Nº 93	700. —
1	"	" 4 " Nº 85	700. —
1	"	" 4 " Nº 104	700. —
1	"	" 4 " Nº 106	700. —
1	"	" 4 " Nº 79	700. —
1	"	" 4 " Nº 80	700. —
1	"	" 4 " Nº 83	700. —
1	"	" 4 " Nº 82	700. —
1	"	" 4 " Nº 84	700. —
1	"	" 4 " Nº 86	700. —
1	"	" 4 " Nº 87	700. —
1	"	" 4 " Nº 88	700. —
1	"	" 4 " Nº 89	700. —
1	"	" 4 " Nº 121	700. —
1	"	" 4 " Nº 122	100. —
1	"	" 4 " Nº 123	100. —
1	"	" 4 " Nº 124	100. —
1	"	" 4 " Nº 126	100. —
1	"	" 4 " Nº 127	100. —
1	"	" 4 " Nº 130	450. —
1	"	" 4 " Nº 336	100. —
1	"	" 16 bandejas Nº 120	40. —
1	"	" 3 caj Nº 21	500. —
1	"	" 3 " Nº 22	500. —
1	"	" 3 " Nº 23	500. —
1	"	" 3 " Nº 24	500. —
1	"	" 3 " Nº 25	500. —
1	Mapoteca Metal, 9 bandejas	Nº 21	2.300. —
1	Mapoteca Metal, 9 bandejas	Nº 22	2.300. —
1	Teodolito Cooke, Troughton	Nº 18660	5.000. —
1	Teodolito Cooke, Troughton	Nº 18669	5.000. —
20	Jalones de madera azuche hierro cu.		11. —
4	Cintas metal 50 mts. cu.		195. —
3	Miras parlantes cu.		53. —
1	Anteojo pris. Oficina Galileo	Nº 98.427	415. —
1	Id. id. Nº 97.934		415. —
1	Id. id. Nº 98.376		415. —
1	Id. id. Nº 97.956		415. —
2	Brújulas Peigne cu.		30. —
2	Barómetros Altimetros RF cu.		60. —
2	Equipos Componer cintas métricas cu.		5. —
1	Máquina esc. 100 esp. Underwood	Nº 555.231	450. —
1	Máquina esc. 125 esp. Woodstock	Nº 8J-572.806	1.250. —
1	Maq. id. id. Nº 8-J-572.792		700. —
1	Maq. Olivetti portátil	Nº 609.660	720. —
1	Maq. Remington portátil	Nº 1.201.195	700. —
1	Maq. Remington portátil	Nº 1.201.189	679. —
3	Alforjas de lona cu.		10. —
3	Monturas completas cu.		339. —
6	Carpas completas sobre carpas cu.		10.000. —
10	Machetes cu.		9. —
1	Juego letras pinarcar a percusión cu.		1.200. —
1	Juego números pinarcar a percusión		500. —
2	Botiquines "Rural" cu.		230. —
2	Tarros lechero cu.		300. —
1	Cofre tipo naranjo		183. —
6	Palas para puntear cu.		46. —
2	Piedras molejon completas c'accres. cu.		46. —
6	Hachas para monte cu.		4. —
2	Picos 2 puntas cu.		25. —
1	Pico zapa y hacha		25. —
3	Cangallas cargueras cu.		195. —
1	Fichero metal, 4 caj. Nº 105		700. —
1	Fichero metal, circular Nº 235 c 8 caj.		2.000. —
3	Estufas a kerosene SAMSON cu.		742. —
1	Fichero metal, 4 caj. Nº 81		288. —
1	Maq. escribir 180 esp. Underwood	Nº 161704	1.400. —
1	Mesa madera 2 caj. Nº 362		120. —
1	"	" 2 caj. Nº 258	160. —
1	"	" 2 caj. Nº 268	160. —
1	"	" 2 caj. Nº 88	260. —
1	Percha tripode sin número		70. —
1	Fichero tipo Kardex 16 bandejas	Nº 253	200. —
1	"	" " Nº 254	200. —
1	"	" " Nº 255	200. —
1	"	" " Nº 256	200. —

2º — Donar a la Provincia de Río Negro los elementos citados en el artículo primero, que fueron cedidos oportunamente en carácter de préstamo.

A tal efecto, proyétase el correspondiente decreto por la Gerencia de Asuntos Jurídicos.

3º — Comuníquese a la Gerencia Contable y Administrativa, regístrese y archívese

Luis Perazzo

OBRAS PUBLICAS

SUBTERRANEOS. — Ampliación de la red de subterráneos en la Capital Federal.

Buenos Aires, 31 de octubre de 1967

Excelentísimo señor Presidente de la Nación:

Se eleva a vuestra consideración un proyecto de ley referido a la ampliación de la red de subterráneos, cuya sanción se propicia por las razones que a continuación se expresan.

La experiencia y los estudios realizados en torno al problema de los transportes de pasajeros en la ciudad de Buenos Aires conducen, invariablemente, a la conclusión de que técnica y económicamente sólo existe una solución real y efectiva: La ampliación de la red de subterráneos. Esta conclusión se robustece a medida que la ciudad crece —horizontal y verticalmente— y se van exteriorizando, cada vez en forma más aguda, las dificultades derivadas de la falta de una adecuada red de transportes a bajo nivel.

Son indiscutibles las ventajas que proporciona el subterráneo y reconocido su alto grado de eficiencia como medio apto para el transporte —a tarifas económicas— de grandes masas de pasajeros. Es universalmente aceptado que constituye el sistema idóneo para resolver los requerimientos de traslado que plantean las grandes urbes y de ahí que al hacer una calificación de los pueblos el subterráneo dé, en cierto modo, la dimensión del desarrollo y potencialidad de los mismos.

Así se ha comprendido en las principales ciudades del mundo, en las cuales los subterráneos se han ido extendiendo hasta alcanzar proyecciones de excepcional importancia, acordes con su desarrollo demográfico y el crecimiento de sus actividades. Así también se ha entendido en algunas otras ciudades de menor importancia, varias de las cuales han incorporado en los últimos años el sistema a su red de transporte y otras planean hacerlo en un futuro inmediato.

Tal expansión contrasta con el proceso operado en la ciudad de Buenos Aires, en la que, salvo 3,5 km. de líneas habilitadas en el año 1966, durante más de dos decenios —desde 1944— la red de subterráneos se ha mantenido dentro de un virtual estancamiento, hallándose en la actualidad integrada por sólo cinco líneas, con una extensión total de 34,3 km.

Si ciudades como Nueva York y París poseen una red de subterráneos cuya longitud alcanza alrededor de 360 y 170 kms., respectivamente, resulta notorio, aun sin olvidar la mayor densidad demográfica de las mismas, que la ciudad de Buenos Aires se encuentra en una situación de evidente atraso en ese aspecto, del que es necesario salir mediante la ejecución de un plan de expansión del sistema que nos permita en primer término recuperar el tiempo perdido y luego seguir el ritmo que imponen el desarrollo y crecimiento de la metrópoli.

El atraso apuntado resulta tanto más significativo si se tiene en cuenta que el subsuelo de Buenos Aires presenta características que lo definen como particularmente apto para la construcción de subterráneos.

Reseñando brevemente los innumerables beneficios que reporta la existencia de una red amplia y orgánica de subterráneos, es oportuno destacar los siguientes: para el pasajero, reduce el tiempo de los viajes, pues la mayor velocidad de este medio abrevia —con relación a los medios de superficie— en casi un 50 % la duración de los viajes; permite calcular con exactitud el tiempo, pues al no estar el servicio expuesto a las congestiones y contingencias del tránsito a nivel, el subterráneo permite a sus usuarios determinar con precisión la duración de los viajes; le brinda mayor seguridad y protección, ya que como surge de las estadísticas, los subterráneos tienen un índice de seguridad muchísimo mayor que cualquier otro medio de transporte. La alta capacidad portante del sistema posibilita el transporte simultáneo de grandes masas de pasajeros y contribuye a evitar la creciente congestión del tránsito. Cabe consignar que en una hora, una línea de subterráneos está capacitada para transportar en cada dirección 36.000 pasajeros, volumen que para su traslado por superficie, requiere en igual tiempo 600 vehículos.

La posibilidad de construir playas de estacionamiento en las proximidades de las estaciones alejadas del centro, permite suponer que muchos automovilistas se abstendrán de ingresar con sus vehículos en las zonas congestionadas, coadyuvando de esa forma en la solución de los graves problemas que plantea actualmente el tránsito en numerosas arterias de la ciudad.

Como toda vía de comunicación, máxime considerando el carácter permanente que le dan las instalaciones fijas, los subterráneos valorizan las propiedades ubicadas dentro de su zona de influencia, bastando el solo anuncio de la construcción de nuevas líneas a bajo nivel para surtir efecto en ese sentido.

Beneficia a la ciudad, pues la mayor rapidez y la eliminación de las congestiones del tránsito, crean a su vez las condiciones para una mayor actividad en los distintos órdenes.

En el aspecto sanitario se obtiene una disminución de los gases tóxicos provenientes de los vehículos, de ruidos molestos y reducción de accidentes.

Tal como ha quedado demostrado durante la última guerra mundial, los túneles subterráneos constituyen un factor importante para la defensa nacional.

No obstante la necesidad de enunciar un amplio plan de expansión de los subterráneos para recuperar el atraso ya comentado, la política económica que se ha fijado el Gobierno Nacional exige determinar con precisión las prioridades de inversiones en obras públicas, a la vez que proceder con la debida mesura a fin de no agravar las dificultades por las que atraviesa el erario.

Dentro de este orden de ideas se hace menester arbitrar los medios para concretar el objetivo propugnado en materia de construcción de nuevos subterráneos, lo que paralelamente permitirá promover una ma-

yor ocupación de mano de obra, a cuyo efecto se prevén los recaudos necesarios para instituir un sistema de afectación de recursos, que asegure la asignación anual de créditos presupuestarios en la medida que los mismos se realicen.

En ese sentido se conceptúa justo y lógico volcar a la ampliación de la red de subterráneos los fondos provenientes de la privatización de los servicios que en su momento estuvieron a cargo del Estado —tales como los explotados por las empresas: Transportes de Buenos Aires, Autorrutas Argentinas y Villalonga-Furlong— y el producido de las ventas de los ómnibus y chasis oportunamente adquiridos con el mismo objeto. Las inversiones a efectuar mantendrán su carácter patrimonial.

También se considera razonable, tal como lo prevé ya el Decreto-Ley N° 2.675/58, que los propietarios de los inmuebles ubicados dentro de la zona de influencia de las líneas que se construyan contribuyan a la financiación de las obras. No existen dudas de la justicia de este tributo, dirigido a restituir a la comunidad parte del beneficio directo que en forma de valorización de sus bienes recibirán los referidos propietarios.

Las razones expuestas determinan la necesidad de actualizar los términos del Decreto-Ley N° 2.675/58 a fin de incorporar nuevas fuentes de recursos a los ya instituidos en esa disposición legal y unificar los establecidos en distintas leyes y decretos.

La afectación en los recursos previstos permitirán concretar un plan prudente y mínimo compuesto de 11.100 kms. que involucra el tendido de la línea F entre Plaza Constitución y Callao y Juncal y la prolongación de las líneas B y D, la primera hasta Triunvirato y Monroe (Villa Urquiza) y la segunda hasta Cabildo y Monroe.

Con referencia a la línea F existe ya idea formada en cuanto a su construcción en una etapa inmediata. La documentación técnica (topografía, obra civil, cómputos, estructura e instalaciones complementarias) está bastante avanzada (80 o/o), esperándose dar término a ella en breve.

La construcción de esta línea reportará diversas ventajas, pues su recorrido constituye el eje Norte-Sud del sector de la ciudad cuya densidad de población alcanza los más altos índices.

En Plaza Constitución establecerá enlace con el F. Gral. Roca, de cual recibirá un notable aporte de pasajeros provenientes de las localidades del Conurbano Bonaerense atendidas por sus distintos ramales.

Permitirá utilizar convenientemente el tramo de túnel existente entre las estaciones San José y Constitución, fuera de servicio desde el establecimiento de la línea E entre Av. La Plata y Bolívar.

En la Avda. Entre Ríos, que deberá ser dotada por supuesto de líneas alimentadoras de superficie, estará en condiciones de absorber un cierto volumen de pasajeros de la provincia a través del Puente Victorino de la Plaza, contribuyendo con ello a aliviar la corriente por el puente Pueyrredón.

Dará a la Avenida Entre Ríos-Callao el medio rápido que requiere su intenso movimiento de pasajeros, integrado en buena parte —como lo demuestra la constante renovación en los vehículos a nivel— por viajeros de corta distancia.

Vinculará las líneas existentes que corren de Este a Oeste, con lo cual ampliará las posibilidades de combinación con las mismas y contribuirá, además, a aliviar la sobrecarga que en algunas horas del día sufre la línea C.

La perspectiva de prolongar más adelante esta línea hasta Plaza Italia por Callao-Las Heras permitirá dotar a esta última arteria de subterráneo que reclama la intensidad de su movimiento de usuarios en especial hacia las zonas de Congreso y Plaza Constitución.

Mediante la combinación con las líneas D, B, A y E, quedará conectada con todo el sector céntrico, zona que polariza buena parte de las actividades de la ciudad.

En lo que toca a la inclusión de las prolongaciones de las líneas B y D en este plan mínimo, su elección responde a los siguientes motivos:

Línea B: Su extensión hasta Villa Urquiza permitirá vincular esta línea con el F. C. Bm. Mitre (línea a José León Suárez), lo que presupone un importante aporte de pasaje. En dicha zona, de marcada actividad, contará además con la alimentación de las diversas líneas de superficie que convergen en ella, aun cuando cabe consignar que algunos de esos servicios están ya conectados a la línea B en Federico Lacroze.

A lo largo del nuevo tramo proyectado se alzan barrios populosos en los que se desarrolla una importante actividad industrial y comercial.

La prolongación proyectada permitirá, por otra parte, solucionar el problema que plantea actualmente la falta de capacidad operativa de la estación Federico Lacroze, cuyas inapropiadas características hacen suponer con cierto fundamento que no fue concebida como terminal sino que habría existido la idea de prolongar hacia el Oeste y se le dio en base a ella la estructura de una estación intermedia.

Al dejar de ser Federico Lacroze estación terminal automáticamente desaparecería el problema apuntado, que constituye en la actualidad un motivo de preocupación por la repercusión que tiene sobre la buena marcha de los servicios. De otro modo habría que pensar seriamente en la remodelación total de dicha estación, obra que demandaría la inversión de grandes sumas.

Línea D: Se trata de una línea que está potencialmente capacitada para absorber una cantidad de pasajeros mucho mayor que la que actualmente transporta.

Se estima que su prolongación hasta Cabildo y Monroe, tanto por el movimiento extraordinario que se registra en la Avenida Cabildo surcada y atravesada por numerosas líneas de superficie, como por la

intensa actividad que caracteriza al llamado centro comercial de Belgrano, habrá de contribuir a llevar al pasaje de esta línea subterránea a niveles de importancia.

Se ha optado en este plan mínimo por la extensión hasta Cabildo y Monroe por tratarse de una línea llamada en última instancia a prolongarse por la primera de esas arterias hasta la Avenida General Paz. Se ha dejado de lado por ese motivo la alternativa de desviar esa línea hasta la zona de Barrancas de Belgrano, donde el enlace con el F. G. B. Mitre (línea al Tigre) hubiera significado un interesante aporte de pasajeros.

Este plan mínimo está armonizado con planes en estudio para medio y máximo recorrido, pero que su formulación se estima prematura, pues requerirá inversiones que sólo pueden considerarse probables a largo plazo.

El proyecto de ley que se acompaña arbitra recursos para el plan mínimo enunciado y da las bases para encarar en el futuro y definitivamente la solución del problema que plantea la necesidad de construir nuevas líneas subterráneas.

Dios guarde a V. E.

Adalbert Krieger Vasena.

LEY Nº 17.510

Buenos Aires, 31 de octubre de 1967.

En uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 5º del Estatuto de la Revolución Argentina,

El Presidente de la Nación Argentina, Sanciona y Promulga con fuerza de Ley:

Artículo 1º — Aféctanse a las inversiones que originen los proyectos, construcciones, instalaciones, material rodante, gastos financieros y demás erogaciones necesarias para la ampliación de la red de subterráneos de la Ciudad de Buenos Aires, los siguientes recursos:

- a) El saldo resultante de las liquidaciones de Transportes de Buenos Aires, Autorrutas Argentinas y Villalonga-Furlong;
- b) El saldo resultante de las Cuentas Especiales "Automotores para Estados Provinciales" y "Compra y Venta de Automotores Decreto Nº 5.570.61";
- c) Los legados, donaciones y contribuciones;
- d) El aporte de capital privado o emisión de acciones, títulos, bonos u otros documentos de crédito;
- e) La contribución de mejoras creadas por el Decreto-Ley Nº 2.675/58, la que será abonada por los responsables a partir de la fecha en que se libren al servicio los nuevos tramos;
- f) Los aportes que se convengas con la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires;
- g) Cualquier otro recurso que especialmente se arbitre a tal fin.

En las leyes anuales de presupuesto se incorporarán los créditos necesarios, cuyo monto no podrá ser inferior al producido de dichos recursos y por sumas equivalentes a las amortizaciones, totales o parciales, que se hagan efectivas por las deudas que mantienen con el Tesoro Nacional la Secretaría de Estado de Transporte, Empresa Transportes de Buenos Aires, Fideicomisaria Liquidadora de la Corporación de Transportes de la Ciudad de Buenos Aires, Subterráneos de Buenos Aires, Autorrutas Argentinas y Villalonga-Furlong.

Artículo 2º — El Poder Ejecutivo determinará la zona de influencia, monto y forma de percepción de la contribución a que se refiere el inciso e) del Artículo 1º de la presente ley.

Artículo 3º — Derógase el Decreto-Ley Nº 2.675/58, ratificado por Ley Nº 14.467 y toda otra disposición legal, en cuanto se opongan a la presente ley.

Artículo 4º — Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Onganía. — Adalbert Krieger Vasena.

INDUSTRIA

NAVAL. — Modifícase la Ley 11.682 referente a inversiones para la construcción o modernización de buques con matrícula nacional.

Buenos Aires, 31 de octubre de 1967.

Al Excmo. señor Presidente de la Nación:

Tenemos el honor de dirigirnos a V. E. a fin de someter a vuestra consideración el adjunto proyecto de Ley.

La Ley que se propicia reconoce como fuente la política del Gobierno de la Revolución Argentina, en cuanto propende a la reactivación de la economía nacional, que ya ha encontrado un cauce de expresión a través de la sanción de la Ley Nº 17.330 alentadora de las inversiones en los ámbitos agropecuario e industrial.

Teniendo en cuenta que las medidas de fomento en ejecución y los créditos disponibles para la expansión y desarrollo de las empresas navieras argentinas han de ofrecer resultados mediatamente apreciables; que es necesaria la renovación e incrementación del elenco nacional, así como la obtención de la plena ocupación de la capacidad operativa del citado sector industrial y en atención a la conveniencia de estimular el armamento nacional para la materialización de inversiones productivas en la industria local, es que se valora la oportunidad de la sanción de una norma como la que acompaña la presente.

Además, cabe tener en debida cuenta la repercusión que tal medida ha de tener en el ámbito laboral, así como el aporte a efectuarse a nuestra balanza de pagos por la contribución que supone la mayor participación de la bandera argentina en los tráficos internacionales.

Por las consideraciones expresadas se estima que el proyecto adjunto habrá de merecer la aprobación de V. E.

Dios guarde a V. E.

Adalbert Krieger Vasena.

LEY Nº 17.508

Buenos Aires, 31 de octubre de 1967.

En uso de las atribuciones conferidas por los Artículos 3º y 5º del Estatuto de la Revolución Argentina,

El Presidente de la Nación Argentina, Sanciona y Promulga con fuerza de Ley

Artículo 1º — Modifícase la Ley Nº 11.682 (texto ordenado en 1960 y sus modificaciones) en la siguiente forma:

1) Agrégase como inciso e) del artículo 81, el siguiente:

- e) Las empresas navieras el ciento por ciento (100 %) de los montos invertidos en construcciones de buques destinados a la matrícula nacional y conversiones o modernizaciones de buques con matrícula nacional y el cincuenta por ciento (50 %) de los montos invertidos en equipos, instalaciones y accesorios de carga y descarga afectados a buques, muelles o galpones; o en dragas, diques u otros artefactos flotantes.

Las deducciones admitidas serán procedentes siempre que se trate de inversiones en bienes de producción nacional y con fines y destino exclusivamente comerciales.

Las disposiciones del presente inciso regirán para las inversiones realizadas en el período comprendido entre el 1º de junio de 1967 y el 31 de diciembre de 1970, ambas fechas inclusive.

El total de las deducciones a efectuar no podrá ser superior al 60 % del beneficio impositivo obtenido por la empresa antes de computarse la deducción.

Podrá asimismo trasladarse a los dos ejercicios inmediatos siguientes, mediante la acumulación de los importes deducibles y hasta el límite del 60 o/o, el excedente que no hubiese sido utilizado en el o en los dos ejercicios inmediatos anteriores.

Artículo 2º — Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Onganía. — Adalbert Krieger Vasena.

INMUEBLES

Buenos Aires, 23 de octubre de 1967.

Excmo. señor Presidente de la Nación

Tte. Gral. D. Juan Carlos Onganía.

S/D.

Mediante el dictado de la Ley Nº 17.450, de fecha 15 de septiembre del corriente año, se dispuso transferir a las Provincias de Mendoza y de La Rioja diversos inmuebles y bienes muebles que se encontraban afectados a la Dirección Nacional de Turismo.

Habiéndose observado que en la transcripción dactilográfica del texto del artículo 5º de dicha ley se ha deslizado una omisión, que resta concordancia a su contenido, se somete a consideración de V. E. el nuevo proyecto subsanando tal circunstancia.

Guillermo A. Borda.

LEY Nº 17.487

Buenos Aires, 23 de octubre de 1967.

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 5º del Estatuto de la Revolución Argentina,

El Presidente de la Nación Argentina, Sanciona y Promulga con fuerza de Ley:

Artículo 1º — Sustitúyese el texto del artículo 5º de la Ley número 17.450, por el siguiente:

"Establécense que las transferencias dispuestas por el artículo 3º de la presente ley comprenden todos los bienes muebles, maquinarias, instalaciones y demás efectos asignados a los inmuebles y mejoras involucrados, como así también todos los automotores afectados a los servicios que tiene a su cargo la Dirección Nacional de Turismo en la Provincia de Mendoza".

Artículo 2º — Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Onganía. — Guillermo A. Borda.

INMUEBLES

Transferencia.

Buenos Aires, 23 de octubre de 1967.

Al Excelentísimo señor Presidente de la Nación:

Tengo el honor de dirigirme al Excelentísimo señor Presidente de la Nación sometiendo a su consideración el adjunto proyecto de Ley, por el que se transfiere en propiedad a la jurisdicción de la provincia de Corrientes una fracción de terreno del Estado Nacional Argentino (Dirección Nacional de Construcciones Portuarias y Vías Navegables) de ciento ochenta y cuatro metros cuadrados (184 m2) de superficie, ubicada en la zona portuaria de la ciudad de Corrientes, en la intersección de las Avenidas Libertador General San Martín y Caá Guazú.

Dicho predio, cuyos límites se demarcan en el plano 5787-PS.1 (foja 6) y su ubicación con respecto al puerto se indica en el plano Nº 4463-PS.1 (foja 8) está destinado a la ampliación del acceso al Parque Mitre y al embellecimiento del lugar donde se encuentra emplazado el Puente de la Batería.

Dios guarde a Vuestra Excelencia.

Guillermo A. Borda. — Adalbert Krieger Vasena.

LEY Nº 17.495

Buenos Aires, 23 de octubre de 1967.

En uso de las facultades conferidas por el artículo 5º del Estatuto de la Revolución Argentina,

El Presidente de la Nación Argentina, Sanciona y Promulga con fuerza de Ley:

Artículo 1º — La Secretaría de Estado de Obras Públicas procederá a transferir, con carácter definitivo y sin cargo, al Gobierno de la provincia de Corrientes, una fracción de terreno ubicada en la intersección

